

MEMORIA FINAL DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Expte.: 22/2024

Rª.: ACD/LGV/EMS/rmg/hlg

Asunto: Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2025.

ANTECEDENTES

El objeto de esta memoria es la motivación y justificación de las medidas de carácter legislativo que se introducen en el texto normativo de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y cuya exigibilidad deriva de los artículos 45 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros, y 34.2 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas incorpora diferentes modificaciones normativas propuestas por las respectivas Consejerías en función de la materia de que se trate.

El artículo 34, y concretamente su apartado 2, determina que la elaboración de proyectos de disposición general implica la elaboración de un borrador inicial que irá acompañado por una memoria justificativa. Es por ello que las memorias correspondientes a cada una de las medidas, elaboradas por los respectivos órganos proponentes o unidades administrativas dependientes de los mismos, se incorporan como anexos a esta memoria general para justificar la adecuación, oportunidad y coste de las mismas.

Se han numerado todas las memorias correlativamente en el expediente electrónico según el lugar que ocupa cada una de las medidas en el texto de la Ley. De ese modo, se puede ir siguiendo el orden del texto con las memorias que lo justifican.

En cualquier caso, al efecto de facilitar la tarea de los órganos informantes, y la posterior labor de tramitación reglamentaria en el Parlamento, se incluye a continuación un pequeño resumen de todas las medidas y de las razones que han motivado su inclusión, si bien la información completa se encuentra en cada memoria específica, a la que nos remitimos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1	Secretario General Técnico			
2				

JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES MEDIDAS.

La justificación exhaustiva de las medidas que se incorpora en el borrador de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se encuentra en la memoria justificativa y económica de las propuestas, elaborada por la Dirección General de Tributos, que incluye también una referencia al análisis del impacto de género de las propuestas, que con carácter general el factor género, no se tiene en cuenta para su configuración, por lo que las medidas suelen ser neutras.

En cambio, los beneficios propuestos en materia de ISD, consideran que dada la regulación que se pretende implantar, puede tener un claro impacto positivo sobre las mujeres, que, a día de hoy, siguen desempeñando roles de “cuidadoras” en mayor medida que los hombres.

No obstante, la remisión a la memoria para una mejor comprensión del alcance, se resumen las novedades a efectos meramente enunciativos.

1. Medidas fiscales en tributos cedidos

Modificación de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.

- A) En materia de IRPF, se extiende al año 2025, la deducción establecida para los años 2023 y 2024, para paliar las subidas de intereses de los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual.
- B) En el Impuesto sobre el Patrimonio, se introduce una bonificación del 100 por 100 sobre la cuota positiva del impuesto, una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones estatales, aunque al tiempo se declara inaplicable, en tanto en cuanto el Impuesto Temporal sobre las Grandes Fortunas esté en vigor, estableciendo en su sustitución, una bonificación autonómica en los términos que se fijan en una nueva disposición adicional, que permite, en relación con los contribuyentes obligados a soportar una carga sobre la que la Comunidad Autónoma no tiene capacidad de decisión, retener en las arcas autonómicas, la totalidad o parte de los ingresos, lo que podrá revertir en el interés general de la Comunidad.
- C) En Materia de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se equipara la validez de las inscripciones de parejas de hecho, en cualquier Registro nacional o internacional al realizado en el registro autonómico, y se incorporan sendas deducciones en adquisiciones intervivos y mortis causa para personas que hayan mantenido una convivencia estable en el mismo domicilio, durante, al menos los 15 años anteriores al devengo del impuesto correspondiente, y siempre que concurran los demás requisitos establecidos en su regulación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 2 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1	Secretario General Técnico			
2				

2. Medidas fiscales en tributos propios

A) La segunda parte de las medidas fiscales se centra en los tributos propios, modificando el hecho imponible del impuesto sobre el impacto visual y medioambiental, de manera que, junto al producido por los elementos de suministro de energía eléctrica, elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas añade las instalaciones de energías renovables, considerando como tales los parques eólicos y solares fotovoltaicos.

La modificación de los hechos imponibles obliga a dar una nueva redacción a los artículos 18 y siguientes de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos, para regular sucesivamente, las exenciones, los obligados tributarios, la cuota tributaria, el periodo impositivo y devengo del impuesto.

La otra novedad significativa, y que afecta también a los contribuyentes que venían autoliquidando el impuesto sobre el impacto visual y medioambiental producido por los elementos de suministro de energía eléctrica, elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas, es la creación de un censo de obligados tributarios del impuesto, tanto los que tributen por los nuevos hechos imponibles, como por los anteriores. Para estos se establece la obligación de presentar en el mes de abril, la declaración censal que se regula en el artículo 28.

B) Modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de La Rioja.

Se producen ajustes puntuales en las tarifas de algunas tasas, para aplicar la reducción de costes asociada a la gestión electrónica de la tasa de propiedad intelectual, así como para actualizar la cuantía de determinadas fianzas asociadas a la ocupación de bienes de dominio público en carreteras al efecto de ajustarla a los actuales costes de reparación.

También se ha creado una nueva tasa para la ocupación de dominio público integrado en la Red de Museos de La Rioja, similar a las existentes en el ámbito nacional, autonómico y local.

Finalmente, se establece también la exención temporal durante 2025 para las tarifas de dos tasas que afectan de modo singular a la actividad agrícola y ganadera, como modo parcial de ayudar al sector primario tras los reveses sucesivos producidos en el ámbito internacional y la climatología adversa, que se mantienen en el tiempo.

3. Medidas administrativas.

El segundo bloque de la ley, integrado en el título II, recoge la modificación de diversas leyes y adopta algunas medidas independientes, con el objetivo de facilitar la consecución de los fines previstos en la Ley de Presupuestos:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 3 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1	Secretario General Técnico			
2				

1) Capítulo I. Hacienda Pública

En el capítulo I se incluye una modificación del artículo 191 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, que tiene como finalidad la en relación con el régimen sancionador de subvenciones.

Hasta el momento, la Ley había atribuido las fases de instrucción y de resolución a dos órganos diferentes en los casos de infracciones graves y muy graves: la instrucción del procedimiento sancionador correspondía a la consejería concedente, reservándose al consejero competente en materia de Hacienda la resolución por la que se imponía la sanción.

Hay que tener en cuenta dos elementos, que conjuntamente han motivado la conveniencia de reservar a la competencia del Consejero de Hacienda solo las sanciones por infracciones muy graves:

- a) La posibilidad de obtener descuentos acumulables del 20% por reconocer los hechos y por pagar en cualquier momento antes de la resolución del procedimiento, previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, lo que obliga a indicar tal cuestión tanto en la resolución de inicio, como en la propuesta de resolución. En el caso de que no se haga uso de dichas facultades antes de la resolución, la cuantía de la sanción debe ser ingresada íntegramente.
- b) La implantación de GRIAR ha llevado a la normalización de los procedimientos de ingreso y de generación de cartas de pago, que deben ser generadas por los centros gestores a cuyo presupuesto se incorporará cada ingreso –en este caso siempre a las consejerías concedentes-. Las entidades bancarias colaboradoras ya no admiten los pagos fuera del sistema implantado, y en paralelo, la administración tampoco puede ya utilizar el previo sistema de indicar cuentas de ingreso.

En consecuencia, se requiere que el centro gestor genere la correspondiente carta de pago y que ésta acompañe a la resolución de inicio si ya hay suficientes elementos de juicio para determinar la cuantía de la multa, y en todo caso a la propuesta de resolución. En el caso de que no se produzca el pago anticipado o el reconocimiento de los hechos antes de dictarse la resolución, la consejería concedente debe emitir nueva carta de pago por la totalidad de la deuda, que debe ser notificada junto con la resolución.

Ello implica que los servicios de la consejería concedente, conjuntamente con la Intervención General para la incorporación del apunte contable, deben monitorizar el pago si se produce antes de la resolución, en conjunción con los servicios de la consejería de Hacienda al efecto de que el contenido de la resolución haga referencia a tales hechos si se producen entre la notificación de la propuesta y la firma de la resolución. Y de nuevo, el expediente debe volver a la entidad concedente para la notificación conjunta de la resolución, y de la nueva carta de pago en su caso.

En conjunto, la evolución técnica ha supuesto que la división del procedimiento entre dos órganos diferentes resulte en la práctica mucho más complejo que cuando se concibió.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 4 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

Si bien resulta del interés de la consejería mantener la resolución de los procedimientos sancionadores para las infracciones muy graves, se ha considerado que resulta más operativo mantener la instrucción y resolución de los procedimientos por infracciones leves y graves en el ámbito de la consejería concedente –o de la que dependa la entidad concedente–.

En consecuencia, desde esta Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno hemos propuesto modificar el apartado 3 del artículo 191, que quedaría queda redactado en los siguientes términos:

“3. La imposición de sanciones a las infracciones muy graves corresponde al titular de la consejería con competencias en materia de hacienda, al que se remitirán los expedientes una vez terminada la instrucción. La imposición de sanciones en infracciones graves y leves corresponderá al titular de la consejería concedente o a la que estuviera adscrita la entidad concedente”.

Esta norma es meramente competencial y procedimental, de carácter autoorganizativo, y por lo tanto no requiere de trámite de consulta previa ni de audiencia corporativa.

Su entrada en vigor no requerirá de la adopción de medios materiales ni personales adicionales, de modo que carece igualmente de impacto presupuestario, lo que hace innecesario elaborar una memoria sobre su coste económico.

Su impacto desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres es estrictamente neutro, y se pretende que así sea, resultando de todo punto indiferente el sexo de cualquier afectado por la misma.

2) Capítulo II. Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Modificación de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta modificación, como la anterior, también parte de esta Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, por lo que se procede a motivarla en este apartado en lugar de crear una memoria específica.

Durante la reciente fusión por absorción la fusión de la Fundación para la Transformación de La Rioja y de la Fundación Ciudad del Envase y del Embalaje con extinción de ésta última, se observó que la regulación de las operaciones con fundaciones en la Ley 3/2003 resultaba excesivamente escueta.

Si bien la rúbrica del artículo 54 se refiere a la “creación, modificación y extinción” de las fundaciones, en el texto de la misma se habla tan solo de la creación y de la adquisición y pérdida de la posición mayoritaria. La Consejería que tramitó el expediente solicitó los mismos informes que se requerían en los demás casos, pese a que de la estricta aplicación literal de la norma podría haberse defendido que no era un trámite preceptivo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 5 / 26

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

Por ello, al efecto de eliminar lo que parece un vacío normativo, se ha optado por ajustar el contenido del artículo a la rúbrica, siguiendo la misma descripción de supuestos prevista en el artículo 49 de la misma Ley en relación con la creación, modificación y extinción de las sociedades públicas.

De este modo, se propone que el artículo 54 quede redactado en los siguientes términos:

“Artículo 54. Creación, modificación y extinción.

La creación, transformación, fusión, escisión y extinción de fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como los actos de adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, directa o indirecta, requerirá acuerdo del Gobierno de La Rioja. El acuerdo se adoptará a propuesta de la Consejería interesada, y previo informe de las Consejerías competentes en materia de Administraciones Públicas y de Hacienda.”

Esta norma es meramente competencial y procedimental, de carácter autoorganizativo, y por lo tanto no requiere de trámite de consulta previa ni de audiencia corporativa.

Su entrada en vigor no requerirá de la adopción de medios materiales ni personales adicionales, de modo que carece igualmente de impacto presupuestario, lo que hace innecesario elaborar una memoria sobre su coste económico.

Su impacto desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres es estrictamente neutro, y se pretende que así sea, resultando de todo punto indiferente el sexo de cualquier afectado por la misma.

3) Capítulo III. Procedimiento administrativo. Modificación de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta medida ha sido propuesta desde esta Secretaría General Técnica, por lo que la justificación de la misma se incluye a continuación.

Existen algunas especialidades competenciales dentro de los procedimientos administrativos que suponen una distorsión en el momento en que se cruzan, se acumulan o se superponen a otros.

Lo habitual dentro del procedimiento administrativo común es que los procedimientos comiencen, se instruyan y finalicen dentro del mismo órgano o, al menos dentro de la misma cadena jerárquica de órganos y de unidades administrativas subordinadas a un solo órgano. No obsta a este principio general la petición de informes (informes de servicios jurídicos o de otros órganos horizontales) o la tramitación de procedimientos paralelos en segundo plano que soporten al procedimiento principal (las modificaciones presupuestarias o los expedientes de gasto y el procedimiento de gestión económico-financiero que transcurre en paralelo a la gestión de las subvenciones o de los contratos).

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 6 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1	Secretario General Técnico			
2				

No obstante, existen determinados procedimientos en los que, por mandato legal introducido para unificación de criterios, por la gravedad de las medidas a adoptar o por motivos similares, no se cumple esta regla general. En estos supuestos, el inicio y la instrucción de un procedimiento se lleva a cabo por los órganos y unidades de una consejería, pero su tramitación finaliza mediante resolución dictada por un órgano de otra consejería o bien mediante un acuerdo de Consejo de Gobierno.

Podemos citar como ejemplo los procedimientos disciplinarios por infracciones muy graves, que se inician e instruyen siempre desde la Consejería de destino del funcionario, pero cuando llevan aparejada como sanción la separación de servicio, son resueltos por el Consejo de Gobierno (artículos 14.d) y 18.c) de la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja), y en el resto de los casos, por el Director General de Función Pública.

Esta especialidad en la instrucción, que en la inmensa mayoría de los casos no genera dudas ni tiene ninguna repercusión, puede generar ciertos problemas interpretativos cuando otro procedimiento posterior toma este procedimiento como punto de partida, pero estableciendo normas de tramitación pensadas para supuestos en los que todos los trámites se han seguido dentro de una sola consejería o dentro de un solo órgano.

Siguiendo dentro del ejemplo del procedimiento disciplinario, cuando como consecuencia de éste se produce una reclamación de responsabilidad patrimonial, los decretos de estructura y funciones establecen como una de las competencias generales de las Secretarías Generales Técnicas la siguiente: *“La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial y procedimientos de revisión relativos a las disposiciones y actos de la Consejería y de los organismos públicos a ella adscritos, cuya resolución compete al titular de la Consejería o que éste deba elevar como propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno”*.

En un supuesto así, en el que se plantee una reclamación de responsabilidad patrimonial sobre un procedimiento disciplinario a un funcionario de la Consejería de Educación y Empleo, instruido por su SGT pero resuelto por resolución del Director General de Función Pública, según lo previsto en el artículo 17.2.d) de la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, no es claramente un acto de la Consejería de Educación y Empleo ni claramente un acto de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno. La misma situación podría producirse en el caso de procedimientos sancionadores en materia de subvenciones

Se pueden defender ambas posturas, pero hemos visto que resulta conveniente establecer un criterio normativo claro para estos supuestos, que delimite una solución unívoca dentro de esta administración. La solución que *ab initio* parece más práctica es que sea la consejería que instruyó el primer procedimiento la que tramite también la responsabilidad patrimonial derivada del mismo. Existe para ello una razón de orden práctico: los antecedentes fácticos son mejor conocidos por el órgano que instruyó que por el órgano que resolvió, y está por tanto en mejor situación para conocer fundadamente de las alegaciones y motivos que fundamentan el segundo procedimiento.

Pero existe también un precedente –el único que hemos podido localizar, en todo caso–, en el que el Consejo Consultivo de La Rioja dio por buena esta solución. El dictamen 76-2011, de 25 de noviembre, a propósito de un procedimiento de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 7 / 26
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

responsabilidad patrimonial instruido por la Consejería de Salud, dio por válida su competencia para instruirlo, por lo que se considera que la solución es válida en derecho.

Por tanto, se propone dar nueva redacción al apartado 4 del artículo 65, que regula algunas cuestiones puramente procedimentales, en el que se intercala un párrafo intermedio que contiene la nueva regla:

“4. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de La Rioja se tramitarán de acuerdo con la normativa básica estatal en la materia, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la propia organización.

Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de procedimientos administrativos en los que la instrucción hubiera correspondido a una consejería, y la resolución del mismo a otra consejería distinta o al Consejo de Gobierno, serán tramitadas desde la consejería que lo instruyó.

La cuantía fijada para que los dictámenes del Consejo Consultivo de La Rioja resulten preceptivos será la que fije el Estado con carácter general en dicha normativa básica.”

Esta norma es meramente competencial y procedimental, de carácter autoorganizativo, y por lo tanto no requiere de trámite de consulta previa ni de audiencia corporativa.

Su entrada en vigor no requerirá de la adopción de medios materiales ni personales adicionales, de modo que carece igualmente de impacto presupuestario, lo que hace innecesario elaborar una memoria sobre su coste económico.

Su impacto desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres es estrictamente neutro, y se pretende que así sea, resultando de todo punto indiferente el sexo de cualquier afectado por la misma.

4) Modificación de la Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja.

Esta medida, al igual que las anteriores, ha partido de esta Secretaría General Técnica, y por lo tanto se procederá a justificar aquí su necesidad.

La mayoría de las normas reguladoras de los Archivos de las comunidades autónomas, están recogiendo la aplicación de la normativa de Transparencia en lo relativo a la regulación del acceso a los documentos bien en sus normas de transparencia, bien en las normas específicas sobre archivos.

La regulación del acceso a los documentos y a los archivos se recoge en los artículos 31 a 34 de la Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja. A nuestro juicio los criterios establecidos para regular el acceso en el vigente artículo 33 son muy genéricos resultando la normativa de Transparencia mucho más completa, lo que en

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 8 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

definitiva proporciona más seguridad tanto al solicitante de la información como a quien debe internamente gestionar la solicitud.

Se ha tenido en cuenta también la regulación contemplada en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, para recogerla expresamente en el articulado ya que establece una especialidad en el ámbito archivístico en cuanto a la necesidad de recabar el consentimiento expreso de los afectados cuando el acceso afecta a determinados datos personales por el trascurso de los años.

La realización de esta modificación puntual de la Ley 4/1994, de 24 de mayo a través de la ley de medidas de 2025 se justifica por la ya citada necesidad de aportar mayor seguridad jurídica al ejercicio de derecho de acceso a la información pública cuando ésta se encuentra transferida al Archivo general del Gobierno de La Rioja o en cualquiera de los archivos que integran el Patrimonio documental riojano.

Respecto de este derecho, si bien no es unánime la consideración del derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental, sí que la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la necesidad de dotarle de una protección cercana a la que tienen los derechos fundamentales.

En consecuencia, consideramos que la ley de medidas puede ser un instrumento idóneo para aportar seguridad jurídica en el ejercicio de este derecho que tiene una indudable trascendencia mediante una modificación y un expurgo muy puntuales de los artículos que lo regulan.

El artículo 31 mantiene su redacción.

El artículo 32 se suprime.

El artículo 33 recibe la nueva redacción siguiente:

“Artículo 33.

El derecho de acceso a los documentos integrantes del Patrimonio Documental de La Rioja se regirá por lo dispuesto en la normativa básica en materia de transparencia y en la ley transparencia de La Rioja, sin perjuicio de las especificaciones que se establezcan en la legislación correspondiente.

Los documentos que contengan datos personales para los que la normativa básica en materia de transparencia exija consentimiento expreso del afectado para su acceso, no podrán ser públicamente consultados sin que medie dicho consentimiento o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”.

El artículo 34 también se suprime.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 9 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

Asimismo, al tratarse de una norma del año 1994, y aprovechando la revisión de la norma, proponemos también cambios de técnica normativa y que reflejen la actual organización del Archivo en el ámbito de la organización del sistema de archivos en lo que afecta al Gobierno de La Rioja.

Varios son los artículos de la Ley 4/1994, de 24 de mayo que se refieren a los “archivos centrales de cada una de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja”, así el artículo 13.1, 14.2 y 4, 18.1 b), 19.2 c) y d), 20.3 y 4 y la Disposición adicional única.

Desde la entrada en vigor de la ley no se han puesto en marcha los archivos centrales por lo que el modelo organizativo actual está integrado exclusivamente por el Archivo general de La Rioja y los archivos de oficina o de gestión.

Este sistema funciona eficazmente por lo que no está previsto que los archivos centrales vayan a ponerse ya en marcha.

La regulación actual está afectando al sistema de valoración documental y consiguiente sistema de conservación documental ya que el artículo 18. b) recoge una fase de archivo central que en la práctica no existe y le asigna un periodo de conservación de 10 años.

Este precepto está interfiriendo en los procedimientos de valoración documental que se están realizando en aplicación del Decreto 3/2014, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de valoración para la conservación o eliminación de los documentos que integran el patrimonio documental de La Rioja, ya que puede interpretarse que hay que añadir 10 años sistemáticamente de conservación con independencia de cuál sea el valor de la documentación.

Puesto que es preciso impulsar el procedimiento de valoración documental para una adecuada política de conservación documental, consideramos que la Ley de medidas puede ser también un instrumento útil para modificar la Ley 4/1994, de 24 de mayo eliminando el archivo central de las consejerías.

Asimismo, y con la misma finalidad, se incorpora a la Ley el Calendario de Conservación y Acceso que regula el Decreto 3/2014 atribuyendo valor legal a este documento que recoge las series documentales que van siendo valoradas y determina los plazos de conservación y eliminación de las mismas. Por tanto, se propone una segunda batería de modificaciones de la Ley en la regulación del sistema de archivos consistente en los siguientes cambios:

- El artículo 13.1 se suprime.
- El artículo 14.2 se suprime
- El artículo 14.4 quedaría redactado de la siguiente manera:

“4. El Archivo General de La Rioja, recogerá la documentación producida o reunida por las instituciones que antecieron a la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como otros fondos de instituciones o personas públicas o

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 10 / 26
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

privadas que, no pudiendo atender adecuadamente estos bienes ingresen en él mediante convenio de depósito, donación u otro régimen, si se considera oportuno.

Asimismo, dará el tratamiento correspondiente a la fase de archivo intermedio a la documentación que le sea transferida por los archivos de gestión, así como la que transfiera el Archivo del Parlamento de La Rioja.”

El artículo 18.a) quedaría redactado de la siguiente manera:

“a) Fase de archivo de gestión. Los documentos generados por las unidades administrativas, en tanto su consulta sea habitual, se conservarán en los respectivos archivos de gestión hasta su transferencia al Archivo General, de acuerdo con los plazos establecidos en el Calendario de Conservación y Acceso del Gobierno de La Rioja o, en su defecto, en un plazo máximo de cinco años desde la finalización de su tramitación.”

- El artículo 18. b) se suprime.

- El artículo 18.1 c) quedaría redactado de la siguiente manera:

“c) Fase de archivo intermedio. En el Archivo General de La Rioja los documentos recibirán el tratamiento correspondiente a esta fase.”

- El artículo 19.2 c) se suprime.

- El artículo 19.2 d) quedaría redactado de la siguiente manera:

“d) Las transferencias de documentos de los Archivos de gestión al Archivo general y de éste al Archivo Histórico se ajustarán a las normas técnicas de transferencias.”

- El artículo 20.3 y 4 se suprime.

- La Disposición adicional única se suprime.

Esta norma es meramente competencial y procedimental, de carácter autoorganizativo, y por lo tanto no requiere de trámite de consulta previa ni de audiencia corporativa.

Su entrada en vigor no requerirá de la adopción de medios materiales ni personales adicionales, de modo que carece igualmente de impacto presupuestario, lo que hace innecesario elaborar una memoria sobre su coste económico.

Su impacto desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres es estrictamente neutro, y se pretende que así sea, resultando de todo punto indiferente el sexo de cualquier afectado por la misma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 11 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

5) Modificación de la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La DGFP propone una revisión parcial de la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, incorporando diferentes propuestas efectuadas desde las consejerías. Las reformas propuestas, que han sido negociadas en el seno de la Mesa General de negociación, se pueden agrupar en cuatro:

- Tipificar como infracción el incumplimiento del deber de comunicación de cambios en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.
- Incorporar cambios en el sistema de cuerpos y escalas, a petición de las consejerías, desde rectificaciones de denominación o de funciones, hasta incorporaciones de nuevas escalas.
- Ampliar la posibilidad de integración con la titulación que sirvió originariamente para el ingreso en el cuerpo y escala de origen.
- Establecer un sistema de protección reforzado en los datos de mujeres víctimas de violencia de género en los procedimientos de personal y función pública.

Adicionalmente, se aprueba de nuevo en versión completa el anexo I de la Ley, de forma que incorpore todos los cambios, los parciales ya practicados en otras leyes, y los que son consecuencia de las modificaciones incluidas en esta Ley.

6) Modificación de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.

La Ley modifica el artículo 61 ter para adaptar la figura del concierto social a la última Directiva Europea en la materia y a la jurisprudencia del TJUE.

7) Modificación de la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.

Se incorpora a la Ley una nueva disposición adicional cuarta, que establece que las solicitudes de mujeres que acrediten ser víctimas de violencia de género se tramitarán mediante un procedimiento abreviado con un plazo máximo de resolución de un mes desde la presentación de la solicitud de la prestación.

8) Modificación de la Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja.

La Ley modifica el actual régimen sancionador para corregir los problemas de proporcionalidad detectados en la tipificación y en las horquillas de sanciones actualmente vigente, y para reducir la discrecionalidad en la graduación de las multas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 12 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

9) Modificación de la Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja.

La Ley incluye en su ámbito a Los establecimientos de hostelería y restauración y los pequeños comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes. La medida, que cuenta con iniciativas similares tramitándose en el Congreso de los Diputados para el ámbito nacional, tiene la finalidad de luchar contra la despoblación de los municipios riojanos y reconocer la función social de estos establecimientos en pequeñas poblaciones.

Con esta modificación se pretende a la vez servir de fundamento a la inclusión en la Ley de presupuestos generales de La Rioja para el año 2025 de las correspondientes partidas presupuestarias destinadas a apoyar económicamente el ejercicio de estas actividades y así potenciar su mantenimiento y contribuir a su creación.

10) Modificación de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.

La Ley introduce dos tipos de medidas muy diferenciadas, al ampliar por una parte las funciones de los órganos competentes en materia de Turismo a nuevas realidades que no existían cuando se aprobó la norma en el año 2001, y por otra a modificar el régimen sancionador, con la recuperación de la sanción de apercibimiento, la actualización de cuantías de las multas y la tipificación de una nueva infracción.

11) Modificación de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

La redacción actual de la disposición adicional duodécima que atribuye a los suelos de alto valor agrario el uso propio de los espacios agrarios de interés (régimen más restrictivo), impide la tramitación de ciertas actuaciones que pueden favorecer el desarrollo rural y la fijación de población en los pequeños municipios, especialmente de la Sierra Riojana.

Entendiendo que sería conveniente un análisis en mayor profundidad, que pudiera finalizar con una modificación de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable en la que se definieran claramente los terrenos de Alto Valor Agrario y sus usos, para conseguir una mayor protección de los recursos agropecuarios de la región, que prohibieran exclusivamente los usos que suponen un gran impacto en la disponibilidad de terrenos para ejercer la actividad agraria, la propuesta pretende flexibilizar el régimen y encontrar una solución a las situaciones puntuales de actuaciones emblemáticas en el medio rural.

12) Modificación de la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ha solicitado una flexibilización del régimen de sus operaciones patrimoniales, al considerar que carece de una posibilidad similar a la prevista en la normativa estatal, de disponer de sus bienes cuando no se estime conveniente su incorporación al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 13 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

En efecto, la previsión general es que los bienes que ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines se integrarán en el patrimonio de la CAR. Sin embargo, no es menos cierto que bajo la misma premisa establecida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, su reglamento de desarrollo establece un sistema que permite asegurar que los bienes que sean necesarios para el Patrimonio del Estado se incorporen al mismo, pero cuando no sea necesario los entes instrumentales puedan enajenarlos.

Así, el artículo 100 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece un trámite por el que los organismos públicos someten a análisis de Patrimonio del Estado la conveniencia de incorporación de los bienes al patrimonio, o en caso de que no sea necesario, su enajenación por los organismos públicos.

La petición se considera razonable, dado que con una regulación como la descrita, adaptada a nuestras normas de organización, quedaría asegurado en todo caso el interés superior de incorporar los bienes que resulten necesarios al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En consecuencia, desde esta Secretaría General Técnica de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno se ha procedido a analizar el régimen patrimonial de la ADER, tanto desde el punto de vista de Ley 7/1997, de 3 de marzo, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como del régimen general establecido en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La conclusión alcanzada es que la solución más efectiva para conseguir el resultado indicado consiste en incluir un nuevo apartado 4 a la disposición adicional décima de la Ley 11/2005, que regula las especialidades del régimen patrimonial de la ADER, con el siguiente tenor literal:

“4. Los bienes inmuebles de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, cuando dejen de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines, podrán ser enajenados previa autorización del Consejero competente en materia de Hacienda no dando lugar a su incorporación al patrimonio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin que le sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.5 e) de esta Ley”.

Esta norma es meramente competencial y procedimental, de carácter autoorganizativo, y por lo tanto no requiere de trámite de consulta previa ni de audiencia corporativa.

Su entrada en vigor no requerirá de la adopción de medios materiales ni personales adicionales, de modo que carece igualmente de impacto presupuestario, lo que hace innecesario elaborar una memoria sobre su coste económico.

Su impacto desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres es estrictamente neutro, y se pretende que así sea, resultando de todo punto indiferente el sexo de cualquier afectado por la misma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 14 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

13) Modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja.

Se introduce esta modificación para dar cumplimiento, en sus estrictos términos, al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 12/2022, de 18 de octubre, de reforma de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja, para la admisión extraordinaria de la participación y la votación telemáticas. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja nº 185, de 12 de septiembre de 2023.

14) Modificación de la Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja.

Se introduce esta modificación para dar cumplimiento, en sus estrictos términos, al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja nº 239, de 29 de noviembre de 2023.

4. Disposiciones de cierre: transitorias, derogatoria y final.

La disposición transitoria primera ha previsto la exención de determinadas tasas ligadas al sector agrario durante el ejercicio 2025, como parte de un paquete de compensaciones a este sector por la delicada situación que atraviesa por distintas causas externas a su actividad.

La disposición derogatoria única contiene la fórmula genérica correspondiente.

La disposición final única señala la entrada en vigor el día 1 de enero de 2025.

El anexo, finalmente, incluye el listado de cuerpos y escalas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sus funciones, y la integración de los antiguos en los nuevos cuando procede, según se ha expuesto en la parte de esta memoria correspondiente a la modificación de la Ley de Función Pública.

CONTENIDO ECONÓMICO.

Las medidas fiscales van acompañadas, cuando resulta procedente, de sus correspondientes memorias económicas, que establecen la justificación financiera o, en su caso, las previsiones estimativas referentes a los ingresos que se espera ingresar o dejar de percibir con respecto a la situación actual, y muestran cómo se han calculado las cuantías que se establecen.

Las medidas administrativas del Título II son estrictamente regulatorias, organizativas o procedimentales y no tienen tampoco efectos de gasto previsible, por lo que no resulta necesaria memoria económica. No obstante, cuando se estima la existencia de gasto asociado a la puesta en marcha de las mismas, se ha hecho constar expresamente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 15 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1	Secretario General Técnico			
2				

MEMORIA DE IMPACTO EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

La memoria remitida por cada una de las consejerías, o en su caso, los apartados de cada propuesta de esta Secretaría General Técnica, incorpora un apartado dedicado al impacto en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, que se considera suficiente para dar por cumplidas las exigencias de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.

El relativamente reciente dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja D.59/23, de 18 de octubre, en su Fundamento Jurídico 3-6, ha señalado la obligatoriedad de incorporar el informe de impacto de género que exige el artículo 22.1 de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja, manifestándose en los siguientes términos:

“El tenor del citado art. 22.1 —que está en vigor— deja clara la obligación de incorporar un informe de impacto de género en todos —porque ninguna exclusión o excepción prevé la Ley— los proyectos de disposición general, de suerte que su ausencia podría fundamentar la impugnación y eventual anulación judicial de éstos. Pero, es más, la propia Ley, en el párrafo segundo del citado precepto, establece ya un contenido mínimo de tales informes, descartándose así una eventual justificación de la omisión de este informe basado en la imposibilidad de determinar su contenido hasta que exista un desarrollo reglamentario específico.

La Disposición Adicional segunda introduce un mandato al Gobierno para, en un plazo de dos años, aprobar las “normas o directrices en las que se establezcan las pautas a seguir para la elaboración del informe de impacto de género, así como su contenido”. No se trata de una disposición transitoria que demore la efectividad de la regulación del actual artículo 22.

(...)

Por más que sea obvia la falta de trascendencia o proyección de la norma en este ámbito, ello debería incluirse en un informe fechado y firmado, y, tal y como ha señalado recientemente el TS (cfr. Sentencia 1039/2023, de 19 de julio), la referida inexistencia de impacto debe ser consecuencia de un análisis real previo del mismo. Si se realizó tal análisis, “los informes ‘neutros’ no serán equivalentes a inexistentes; por el contrario, cuando pueda inferirse que se ha utilizado una formula rituarial para afirmar la neutralidad de la norma a esos efectos, pero que no ha existido realmente un análisis sobre el particular, esos informes deben reputarse inexistentes”.

Ello sentado, en el caso que nos ocupa, pese a la parquedad del análisis efectuado y, como hemos advertido, su inadecuada formalización —aspectos éstos que deberían corregirse en un futuro—, puede entenderse que tal análisis se ha realizado o existido, teniendo presente que estamos ante

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 16 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

una modificación normativa nimia, cuya neutralidad o nula repercusión en materia de igualdad de género resulta patente, sin necesidad de realizar un examen más detallado.”

El artículo 22.1. de la citada Ley indica que “La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja incorporará un informe de impacto de género en los proyectos de leyes y reglamentos y en los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno para garantizar la incorporación del principio de igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

Dicho informe contendrá, como mínimo, la estimación del impacto potencial del proyecto normativo en las mujeres y hombres, el análisis de las repercusiones positivas o adversas en materia de igualdad de la actividad proyectada, así como las medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten, promoviendo de este modo la igualdad.”

En cuanto a la formalización del análisis en un informe separado y autónomo del cuerpo principal de esta memoria, tal exigencia no se deduce de la redacción del artículo 22.1 de la Ley 7/2023. Son múltiples los contenidos que deben acompañar a una norma, y resulta válido hacerlo de forma autónoma o agrupándolos en un solo documento.

Como ejemplo, la memoria económica del coste, que es exigible en las normas con repercusión económica, puede incorporarse como un apartado más de la memoria justificativa o como un documento aparte, sin que ello implique que una solución sea más válida que otra. Lo mismo puede decirse acerca del estudio de cargas administrativas, que puede incorporarse como documento autónomo o como un apartado en una memoria justificativa o en la memoria de tramitación del expediente o incluso, como apartado de un informe de otro órgano.

La exigencia de emisión de un informe como documento autónomo o como contenido de otro informe o memoria viene marcada, antes que, por el contenido del mismo, por dos circunstancias:

1) Que el órgano que debe emitirlo sea distinto del que ha emitido los otros informes y memorias (señaladamente, en nuestra administración, tienen la consideración de informe autónomo dentro de procedimiento de elaboración de disposiciones generales los informes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, del SOIESP, de la Dirección General de Control Presupuestario, de Intervención General, ...)

2) Que la emisión de esos informes, aunque deben ser emitidos por el mismo órgano, obedezcan a distinto contenido y a distinta fase del procedimiento. Así, por ejemplo, en los sucesivos informes y contra informes de Intervención General y del centro gestor dentro del procedimiento de levantamiento de reparos, o en las diferentes versiones de las memorias de tramitación de la SGT en los procedimientos de elaboración de las disposiciones de carácter general.

Dado que el artículo 22 de la Ley 7/2023 no señala el órgano que debe emitir ese informe de impacto de género, debe considerarse que el análisis que exige puede ser realizado indistintamente por el órgano que elabora la memoria

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 17 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

justificativa, como sucede en el presente caso, o por el órgano que tramita la disposición general, o incluso que con carácter general ser atribuyera a un órgano *ad hoc*.

La memoria justificativa que acompaña al borrador tiene un contenido necesario –“acerca de la necesidad de la aprobación de la nueva norma, de su adecuación al objeto y finalidad fijados en la resolución de inicio, la incidencia que habrá de tener en el marco normativo en que se inserte, una relación de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia, así como una valoración de los efectos previsibles que puedan seguirse de su aplicación. Incluirá también, en su caso, los estudios e informes previos que le sirvan de fundamento, así como una relación de aquellos informes o trámites que se consideren necesarios en la tramitación del expediente”-. Pero no existe ni limitación ni prohibición legal de añadir otro contenido adicional y complementario –jurisprudencia, doctrina administrativa, negociación con representantes de los trabajadores, cuestiones sobre protección de datos, referencia a la tramitación paralela de actos o normas complementarias, ...-, según resulte adecuado o necesario a juicio de su titular, a la luz de las circunstancias, para la mejor justificación y tramitación de la norma.

En consecuencia, por cuestiones de economía procedimental, se considera plenamente válido que se haya dado cumplimiento a la exigencia legal incorporando dicho análisis sobre igualdad entre hombres y mujeres a la memoria justificativa elaborada por cada centro proponente en vez de elaborar un informe autónomo, al menos en tanto en cuanto la Ley o su reglamento de desarrollo si llegara a aprobarse no indiquen expresamente lo contrario.

INCIDENCIAS.

Recibidas y examinadas las propuestas, se han corregido de oficio, previa consulta informal con la DG de Función Pública y con la Consejería de Salud y Servicios Sociales, dos referencias erróneas en la propuesta remitida:

- Al renumerarse la actual disposición adicional quinta. a) 34º de la LFPCAR (escala Medicina del Trabajo), se proponía que pasara a renumerarse como Disposición adicional quinta. b) 33º con la misma redacción, si bien lo correcto, y lo que se ha incorporado al texto, era renumerarla como Disposición adicional quinta. a) 33.

- También se había detectado una redacción incompleta de las funciones del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Acción Social, Servicios Sociales y Sociosanitarios, Escala de Técnico Atención Temprana. La redacción, una vez revisada, es la siguiente: “Le corresponde, dentro de la Unidad de Atención Temprana, las funciones de tratamiento terapéutico, habilitador y rehabilitador para conseguir el máximo desarrollo evolutivo de menores de 0 a 6 años con déficit o retraso en el desarrollo o riesgo de padecerlo”.

Igualmente se ha modificado la redacción de la disposición adicional sexta de la ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos previa consulta con la Dirección General proponente, para solventar una incongruencia en su redacción, ya que pese a calificarse como disposición adicional, posteriormente se denominaba disposición transitoria, y se ha modificado en consonancia la rúbrica en el sentido que aparece en el índice de la memoria:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 18 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Secretario General Técnico				
2				

“Disposición adicional sexta: Régimen censal de obligados tributarios del previo Impuesto sobre el impacto visual y medioambiental producido por los elementos de suministro de energía eléctrica, elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas.”

INFORMES Y TRÁMITES.

1. Resolución de inicio.

La resolución de inicio del procedimiento ha sido dictada con fecha 1 de julio de 2024 por el Consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, órgano competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La resolución fue comunicada a cada una de las secretarías generales técnicas de las demás consejerías, a las direcciones generales de esta consejería y a los jefes de servicio de esta SGT, estableciendo un plazo de casi dos meses al efecto de que formularan sus propuestas. Además del emplazamiento, se les apercibió de que debían practicar los trámites de consulta previa, audiencia corporativa, negociación colectiva o participación prevista en normas sectoriales cuando fueran necesarias, además de acompañar en todo caso la memoria justificativa y de impacto sobre la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, y la memoria económica en las medidas con impacto económico.

2. Memorias justificativa, económica y de impacto de género.

Las propuestas de las consejerías se han incorporado como anexos a esta memoria, tal y como se ha indicado previamente, y se han justificado las propuestas de esta SGT a lo largo de la presente memoria.

3. Diligencia de formación del expediente.

Se dictará tras la aprobación de esta memoria.

4. Informes.

Se considera preceptiva la emisión de los siguientes informes y dictámenes durante la tramitación de este Anteproyecto:

1) Informe del Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos.

El Servicio debe emitir informe según el Decreto 125/2007, de 26 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia de organización administrativa, calidad y evaluación de los servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Rioja y sus Organismos Autónomos, informando con carácter preceptivo toda disposición

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PADES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 19 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Secretario General Técnico				
2				

general que suponga la creación, modificación o extinción de órganos o de procedimientos, por lo cual su informe resulta preceptivo en relación con varios artículos de la norma proyectada.

El SOIESP ha emitido su informe con fecha 18 de septiembre de 2024, y ha efectuado observaciones de fondo en relación con las propuestas de modificación de la Ley de Función Pública y de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y, tangencialmente, con la modificación de la Ley de Turismo de La Rioja.

En el primer caso, señala cuatro asuntos de distinto alcance:

- a) Se ha encuadrado a la escala de telefonistas en el grupo E. El Consejo Consultivo de La Rioja, en su dictamen sobre la Ley, ya llamó la atención sobre la pervivencia de este grupo E para lo que el actual EBEP denomina “Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta”, y que no existe como tal grupo E en el EBEP.
- b) Debería tenerse en cuenta que pueden existir determinados cuerpos o escalas regidos por normativa estatal, como es el caso del personal docente no universitario cuyos procesos de integración deben cumplir lo establecido en dicha normativa. En consecuencia, plantean la conveniencia de excluir expresamente a tales cuerpos y escalas de la nueva regla especial para los procesos de integración que se introduce en el apartado 5 de la D.A 7ª.
- c) Se ha incluido en la descripción de las funciones de la escala de conductores la expresión “entre otras”, lo que es contrario a la necesaria concreción de las mismas que debe caracterizar este instrumento, por lo que se sugiere eliminarla.
- d) Existen algunas posibles mejoras de redacción

Se han remitido las observaciones a la DG de Función Pública, al efecto de que se pronuncie sobre la conveniencia de seguirlas, o en caso contrario sobre las razones para mantener la redacción. Como consecuencia de esta consulta informal, se han introducido los siguientes cambios en el texto de la norma:

- a) Respecto a la observación que se realiza sobre la DA 5 f), en el sentido de que no debería realizarse referencia al grupo E, la DGFP se muestra conforme y por tanto se procede a sustituir la expresión “Grupo E” por “Agrupaciones profesionales” tanto en el texto articulado como en el anexo I.
- b) Respecto a las observaciones sobre el nuevo punto 3 de la Disposición Adicional quinta e) referido a la Escala Mecánico Conductor, la DGFP está de acuerdo en suprimir de las funciones la expresión “entre otras”. Adicionalmente, esa observación les ha llevado a una revisión completa de la propuesta y sugieren hacer lo mismo en el nuevo punto 4 de la Disposición Adicional 5 e), suprimiendo también en las funciones de la Escala Oficial maquinista la expresión “entre otras”. Se han efectuado ambas correcciones tanto en el cuerpo de la Ley como en el anexo I.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 20/ 26
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno		2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1	Secretario General Técnico			
2				

c) Respecto a la observación de la modificación del apartado 5 de la DA 7, entendemos que no procede hacer ninguna referencia a la exclusión de los cuerpos docentes, porque en el articulado de la Ley, no se hace referencia en ningún apartado a los cuerpos docentes, los cuerpos que se crean en la Ley son todos no docentes. La Disposición adicional séptima lleva por título “Requisitos y efectos de la integración en los nuevos cuerpos y escalas y como ninguno de los cuerpos y escalas creados en la Ley son docentes, el apartado 5 por el que se establece la excepción a la regla general de cumplimiento de los requisitos de titulación para el acceso a los cuerpos y escalas de administración especial no afecta a la integración en cuerpos docentes.

d) En relación con la revisión formal de algunas redacciones, la DGFP está de acuerdo en sustituir la expresión “Se añade un nuevo punto 34” por “El punto 34 de la Disposición Adicional Quinta.a) pasa a tener la siguiente redacción”, y también con respecto a la sugerencia realizada en el punto 7 de sustituir la palabra funciones por un sinónimo para evitar su repetición. En este caso se ha redactado de nuevo el apartado de modo que no se requiera usar dos veces la palabra funciones en tres líneas.

El informe del SOIESP también indica algunas erratas en esta parte del anteproyecto, que se han corregido sin necesidad de plantearlas al centro gestor, dado que se trataba de errores burdos. Cabe indicar, en relación con la denominación del Registro, que éste aparece denominado de ambas formas, con el “de” faltante al que se refiere el informe en el artículo 58 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y sin él en las referencias al Registro que aparecen en la sede electrónica del Ministerio. Se ha optado por la denominación legal, que además es la que aparece en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Finalmente, el SOIESP señala también la conveniencia de trasladar al correspondiente decreto de estructura y funciones los cambios introducidos en el régimen competencial de la Ley de Turismo. En este caso, y aun cuando se analizará el asunto más en profundidad una vez aprobada la Ley, no consideramos que sea estrictamente necesario efectuar esta traslación. Todos los decretos de estructura y funciones reconocen ya entre las funciones de tipo genérico de las direcciones generales, por defecto, “i) *Cualquier otra que se atribuya por disposición legal o reglamentaria o le sea delegada o desconcentrada.*” Por tanto, en ningún caso se va a producir una antinomia o un vacío normativo, lo que hace que esa traslación no resulte imprescindible. Así pues, se analizará la misma en términos de pura oportunidad, con la consejería interesada, en el momento en el que exista una propuesta de modificación del Decreto por causas más sustanciales.

2) Informe de la Dirección General de Control Presupuestario.

El informe es preceptivo según lo dispuesto en el artículo 14 i) del Decreto 51/2023 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 21 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

La DGCP ha emitido su informe con fecha 23 de septiembre, que recoge las siguientes conclusiones:

“Esta DG entiende suficientemente motivada la tramitación del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2025.

Según la información aportada en las memorias económicas del expediente, se prevé una minoración de los ingresos a recaudar derivada de las medidas previstas en el anteproyecto de ley sometido a informe en torno a 10,6 millones de euros anuales, motivada, en especial por la medida que afecta a la bonificación autonómica prevista en la Disposición Adicional IV relativa al impuesto del patrimonio.

No obstante, cabe señalar que el impacto en los ingresos de la Comunidad derivados de las medidas en el Impuesto sobre el Patrimonio se producirá a partir del ejercicio 2026.

Por otra parte, esta DG considera que este impacto en la menor recaudación podrá ser compensado con mayores ingresos motivados por la mejora de la economía (en especial, en los ingresos del Sistema de Financiación Autonómico), o en su defecto, por ajustes a la baja en las políticas de gasto.

Se entiende informado este expediente a efectos del artículo 14 i) del Decreto 51/2023 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.”

En consecuencia, puede continuar la tramitación del expediente sin que resulte necesario introducir cambios en el texto del anteproyecto como consecuencia de este informe.

3) Informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos

La DGSJ ha emitido informe sobre el texto completo de la Ley, con carácter preceptivo y último en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 12 del Decreto 21/2006, de 7 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

El informe considera que la comunidad autónoma tiene competencias estatutarias para aprobar la presente Ley, que el rango normativo de la norma es el adecuado, que se han cumplido las previsiones legales en cuanto al procedimiento aplicable y que el texto es ajustado a derecho. No obstante, el informe contiene las siguientes observaciones:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 22 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

a) En relación con las medidas fiscales propuestas por la Dirección General de Tributos en materia de impuestos propios y cedidos, se plantean tres cuestiones 1) Si la supresión del apartado 2 del artículo 18, sobre afectación de los ingresos es un olvido o se trata de un efecto buscado; 2) Se sugiere una redacción alternativa del artículo 27, que a juicio del órgano informante resulta más clara; y 3) La nueva Disposición Adicional Sexta que se propone para la Ley 10/2017 hace referencia a un régimen transitorio, por lo que lo lógico sería introducirla como Disposición Transitoria.

Una vez remitido informalmente el informe a la DGT, ésta ha considerado que las observaciones son de suficiente entidad como para merecer un informe complementario, a cuyo contenido nos remitimos. No obstante, y resumiendo su contenido de forma muy sintética, el informe complementario rechaza las observaciones de la DGSJ: 1) La supresión es buscada, en vista de que la protección del medioambiente se ha vuelto horizontal y tiene dimensiones que afectan ya a agricultura, mundo rural, turismo, educación, fijación de la población, vertebración del territorio y otros aspectos, y la finalidad a la que se destine esta financiación debe ser más flexible de lo que estipulaba el apartado suprimido; 2) La redacción original de la medida es más sencilla y fácilmente comprensible que la sugerida por la DGSJ; y 3) La disposición cuestionada no contiene un régimen transitorio entre normativa anterior y posterior, sino una obligación con vigencia necesariamente temporal de ahí que formal y sistemáticamente se haya propuesto su configuración como disposición adicional.

En consecuencia, no se efectúa ningún cambio sobre el texto propuesto.

b) El informe también contiene observaciones a la propuesta de modificación del artículo 61. Ter de la ley 7/2009, de 22 de diciembre de servicios Sociales de La Rioja, en relación con la figura del concierto social. La DGSJ, tras analizar la medida concluye que la forma de provisión de servicios reservada a entidades sin ánimo de lucro y a entidades privadas que reinviertan es conforme a derecho, siempre que se cumplan los principios de transparencia, publicidad y competencia, y que el marco legal de estas entidades contribuya a los objetivos de solidaridad y eficiencia presupuestaria.

Remitido el informe a la Consejería proponente comparte el criterio del informe, señalando que efectivamente la provisión de estos servicios, se realizará bajo los principios de transparencia, publicidad y competencia.

c) La siguiente medida analizada es la modificación de la Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja, mediante la adición de una Disposición adicional cuarta.

En aras a garantizar la seguridad jurídica, la DGSJ somete a consideración del órgano gestor la posibilidad de incluir el plazo especial conferido a los expedientes de mujeres víctima de violencia de género, además de en la disposición adicional proyectada, en el apartado 4 de este precepto, que es el que regula, específicamente los plazos de resolución de solicitudes de renta de ciudadanía. Se propone la siguiente redacción: “4. La resolución será dictada y notificada en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Quedan exceptuadas las resoluciones derivadas de expedientes de mujeres víctimas de violencia de género que se dictarán y notificarán en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud de la prestación.”

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 23 / 26
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

La Dirección General proponente, acepta las observaciones de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, y se modifica el texto, incorporando una modificación del apartado 4 del artículo 17, que no estaba en el texto inicial.

d) La propuesta de modificación de los artículos 62, 63, 64 y 67 de la Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja, sobre régimen sancionador, plantea la cuestión de si se consideran consecuencias graves los mencionados en la letra d) anterior (graves daños a las personas, los bienes o al medio ambiente) o si deberían definirse en otro lugar, porque no hay otra definición de esas consecuencias graves.

En este caso desde el órgano proponente, tras consulta realizada por esta Secretaría General Técnica, manifiesta lo siguiente:

“La Ley 1/2011, en su redacción actual, incluye en el artículo 62 dedicado a las infracciones muy graves, el concepto “consecuencias graves” en el apartado f), el término “gravemente” en el apartado g) y “consecuencias muy graves” en el apartado k, estimando que ante hechos constitutivos de la aplicación del régimen sancionador hay que valorar el nivel de daños a personas, bienes o medio ambiente pero no sólo, ya que el artículo 23 “Procedimiento de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil” de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su apartado 2, vincula la gravedad a que:

- *se hayan producido daños materiales o personales*
- *se produzca paralización de todos o alguno de los servicios públicos esenciales.*

De acuerdo con lo expuesto se estima apropiado mantener el texto propuesto y no incluir precisiones apreciando que en la actualidad la Ley 1/2011 ya acoge el concepto “consecuencias graves” y términos afines, y entendiendo que se trata de un concepto jurídico con determinaciones diversas.”

De acuerdo con lo expuesto, el texto no sufre modificación.

e) En cuando a la propuesta de modificación de los artículos 4, 39, 43 y 46 de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja, el informe analiza tales artículos, y propone redacciones alternativas para mejorar la redacción de algunos de ellos y su aplicabilidad.

Solicitado informe al órgano proponente éste se muestra conforme con las observaciones del informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, dando nueva redacción a los artículos propuestos por el órgano consultivo, que se incorporan al texto final.

f) Finalmente el Informe se detiene en la propuesta de modificación de la DA 12ª de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

El informe señala: *“La propuesta de modificación procede de la DG de Agricultura y Ganadería. Entendemos pertinente que sea objeto de informe por la DG de Urbanismo y Vivienda dadas las funciones que le corresponden en virtud de lo dispuesto en el artículo*

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 24 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretario General Técnico			
2			

11 del Decreto 57/2003, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Política local, Infraestructuras y lucha contra la despoblación, y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de organización del Sector Público de la CALR. Máxime cuando el informe del SOIESP ha señalado al respecto que la modificación restringe el régimen jurídico aplicable al suelo no urbanizable especial de protección agropecuaria únicamente al supuesto del artículo 31.3 e) de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable (DPSNU), con lo que a su juicio quedarían sin sujeción a este régimen el resto de supuestos.”

Efectivamente, tal y como señala el informe de la DG de Servicios Jurídicos, al afectar la modificación a una materia competencia de la DG de Urbanismo y Vivienda, hubiera sido necesario, o bien que la propuesta fuera suscrita por ambos órganos o que se le hubiera solicitado informe antes de la remisión a esta Secretaría General Técnica.

Dada la complejidad de la materia que regula, y las dudas surgidas acerca del alcance de la medida, y del régimen aplicable a los supuestos no expresamente citados en la propuesta, así como el hecho de que se establece un régimen transitorio subordinado a la modificación de la DPSNU, y que la redacción puede generar distorsión en su aplicación, se ha considerado necesario retirar la propuesta del texto final a elevar a la aprobación del Consejo de Gobierno.

Indicar, no obstante, que desde esta Consejería se comparte la oportunidad de reformar la normativa, con el fin de permitir ciertas actuaciones que puedan favorecer el desarrollo rural y la fijación de población en los pequeños municipios, por lo que se valora positivamente avanzar en la modificación de la DPSN, como también propone la Consejería.

4) Incidencias. –

En el curso de la tramitación del expediente normativo, se han introducido las modificaciones que ya se han analizado precedentemente. Pero consecuencia de la supresión de la modificación incorporada en el **CAPÍTULO X. MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL SUELO, y su artículo 14. Modificación de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja**, ha sido necesario reenumerar el resto del texto, que ha pasado a tener 12 capítulos y 16 artículos, circunstancia que deberá ser tenida en cuenta para una correcta comprensión de la norma.

5) Una vez fijado el texto definitivo del proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, se remitirá, según lo dispuesto en el artículo 65.3.d) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, a la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 25 / 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretario General Técnico		
2			

En vista de todo lo expuesto, esta Secretaría General Técnica informa favorablemente el presente proyecto normativo, y propone su firma y su aprobación como anteproyecto y su elevación al Consejo de Gobierno para su ulterior aprobación como proyecto, con remisión al Parlamento de La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 26/ 26
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00880-2024/000574	Memoria justificativa	Consejo de Gobierno	2024/0844587	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1	Secretario General Técnico			
2				